Ecologismo de mercado

Joshua Kurlantzick

En los países pobres la caza de especies protegidas puede ser la mejor vía para salvarlas.

En agosto, en plena estación seca, el Parque Nacional de Luangwa Sur, en Zambia, está tan abarrotado de animales que los entusiastas de la naturaleza se ven obligados con frecuencia a detener sus *jeeps* para dejar pasar enormes rebaños. En una mañana, mi safari pasó entre miles de búfalos, por vastas llanuras llenas de impalas y cebras, y a pocos metros de elefantes. Estas imágenes de abundancia de fauna africana son cada vez menos frecuentes. En la mayoría de los países en desarrollo, el número de animales en libertad ha descendido drásticamente en las últimas décadas a causa de la caza furtiva, la urbanización y la pobreza. En África, la población de rinoceronte negro ha pasado de unos 100.000 en los 60 a menos de 5.000. La organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) calcula que, al ritmo actual, en 30 años habrá desaparecido un 20% de las especies del mundo.

Sin embargo, aunque éstas van desapareciendo en la mayoría de los países en desarrollo, en algunos países del sur de África, como Zambia, Zimbabue y Suráfrica, las poblaciones animales aumentan. En general, estos países no poseen más recursos económicos, mejores climas ni menor tasa de crecimiento de la población que otros pobres. Si han logrado proteger la población animal no ha sido por regular sus hábitats, sino por adoptar el ecologismo de libre mercado, una teoría –popular en los países ricos en las dos últimas décadas– que, en realidad, presenta mejores perspectivas para el mundo en desarrollo. Este ecologismo postula que los humanos son *per se* egoístas y que los gobiernos deben proteger el derecho a la propiedad privada, no los recursos naturales directamente. Si se otorgan derechos sobre dichos recursos a los individuos, el mercado fija los precios de la caza mayor, y el hecho de poseer, vigilar o matar especies en peligro gana valor, por lo que la gente las conserva con más prudencia. Sin embargo, hasta hace poco, la mayoría de los países en desarrollo eran partidarios de estrategias de conservación centralizadas y proteccionistas. Cuando los británicos se apoderaron

de partes de África a finales del siglo xix, crearon parques nacionales y expulsaron a las poblaciones indígenas de sus tierras para proteger a los animales. También crearon reservas semejantes otras potencias coloniales, y casi todos los países en desarrollo han mantenido la misma política desde la independencia.

En los países más ricos, los gobiernos tienen recursos para impedir la caza furtiva y pagar salarios decentes a guardas forestales, y su población, en general, está más dispuesta a ceder cierta gratificación económica individual por el bien de la sociedad. Pero pocos Estados pobres pueden proteger a sus animales salvajes. Un estudio de 1995 calculaba que, en Kenia, defender a los elefantes costaría unos 165 euros por kilómetro cuadrado de hábitat, una suma imposible para su Gobierno. No es raro que la población animal en Kenia haya descendido casi un 50% en las dos últimas décadas. Además, la corrupción y la pobreza, exacerbadas por el VIH/sida, también contribuyen a dificultar la gestión de la naturaleza en los países pobres. Los desesperados y hambrientos no pueden discriminar entre especies comunes y en peligro. Los habitantes de la cuenca del Congo consumen casi cinco millones de toneladas de carne animal al año.

Otro factor aún más importante es que el control por el Estado de los animales salvajes les quita valor para la población local, que no obtiene provecho. Según un estudio sobre la Reserva de Masai Mara (Ke-nia), la población recibía menos del 10% de los ingresos por turismo del parque: ganan tan poco por mantener vivos a los animales para el turismo que venden información a los furtivos.

Los países en desarrollo deben considerar la fauna salvaje como un recurso renovable. Zimbabue es un ejemplo: por su condición de país *non grato*, ha quedado al margen de las presiones de los Estados occidentales donantes y las organizaciones internacionales para que evitara estrategias de conservación en las que entrara la caza. En los 80, ante la generalización de la caza furtiva que comenzaba a diezmar las poblaciones animales, su Gobierno creó el Programa de Gestión de Recursos Indígenas en Áreas Comunitarias (CAMPFIRE, en sus siglas en inglés), y otorgó a las pequeñas comunidades derechos sobre la tierra y los recursos animales –búfalos, elefantes y otros ejemplares de caza mayor– en

sus áreas. Cada una podía vender licencias de caza o mostrar los mamíferos a los turistas. Según el Gobierno, las nuevas rentas incrementarían el valor de la fauna para los residentes locales, lo que disminuiría el interés en ayudar a los furtivos.

Los habitantes empezaron a comprender las posibilidades de esta fuente de ingresos a largo plazo. Tomaron decisiones colectivas sobre cuántos animales podían cazarse, anunciaron su fauna a los guías de safaris y elevaron el precio de la caza –ahora, los permisos pueden costar hasta 20.000 dólares por animal muerto–. Desde el comienzo del CAMPFIRE, las poblaciones se han recuperado. Por ejemplo, el número de elefantes en Zimbabue es más del doble que hace 20 años, aunque con la reciente agitación política y la desaparición del imperio de la ley en el país se han perdido algunos ejemplares. También han establecido programas parecidos otros países del sur de África, con resultados similares. Los rinocerontes blancos de Suráfrica han pasado de unos 200 a principios de los 70 a unos 11.000, después de desarrollar estrategias de mercado. En la región de Luangwa, el porcentaje de ingresos rurales dedicados a la gestión de la fauna salvaje au-mentó más de diez veces entre 1997 y 2000.

A pesar de estos éxitos, a los grupos ecologistas de los países ricos les preocupa que les llamen asesinos de animales si apoyan abiertamente la conservación de libre mercado. Durante años, WWF no informó a sus miembros de que había financiado en África programas que incluían la caza. Las organizaciones occidentales protectoras de animales han criticado los programas que consideran a los grandes mamíferos un recurso renovable. Ni siquiera los partidarios del ecologismo de libre mercado se centran en los países en desarrollo. Aunque algunos especialistas, como el economista de la Universidad de Nueva York William Easterly, defienden la aplicación de incentivos de mercado a la ayuda exterior, ningún gabinete de estudios considera prioritarias las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Los más ecologistas del Congreso de Estados Unidos –incluidos los defensores de soluciones de libre mercado en su propio país– han ignorado el potencial de este conservacionismo fuera. Mientras los grandes grupos ecologistas, los partidarios del libre mercado en EE UU y Europa, y los países en desarrollo no tengan el valor de adoptar la política de mercado, escenas como la de Luangwa Sur serán cada vez más difíciles de ver.

En los países pobres la caza de especies protegidas puede ser la mejor vía para salvarlas. Joshua Kurlantzick

En agosto, en plena estación seca, el Parque Nacional de Luangwa Sur, en Zambia, está tan abarrotado de animales que los entusiastas de la naturaleza se ven obligados con frecuencia a detener sus *jeeps* para dejar pasar enormes rebaños. En una mañana, mi safari pasó entre miles de búfalos, por vastas llanuras llenas de impalas y cebras, y a pocos metros de elefantes. Estas imágenes de abundancia de fauna africana son cada vez menos frecuentes. En la mayoría de los países en desarrollo, el número de animales en libertad ha descendido drásticamente en las últimas décadas a causa de la caza furtiva, la urbanización y la pobreza. En África, la población de rinoceronte negro ha pasado de unos 100.000 en los 60 a menos de 5.000. La organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) calcula que, al ritmo actual, en 30 años habrá desaparecido un 20% de las especies del mundo.

Sin embargo, aunque éstas van desapareciendo en la mayoría de los países en desarrollo, en algunos países del sur de África,

como Zambia, Zimbabue y Suráfrica, las poblaciones animales aumentan. En general, estos países no poseen más recursos económicos, mejores climas ni menor tasa de crecimiento de la población que otros pobres. Si han logrado proteger la población animal no ha sido por regular sus hábitats, sino por adoptar el ecologismo de libre mercado, una teoría –popular en los países ricos en las dos últimas décadas– que, en realidad, presenta mejores perspectivas para el mundo en desarrollo. Este ecologismo postula que los humanos son *per se* egoístas y que los gobiernos deben proteger el derecho a la propiedad privada, no los recursos naturales directamente. Si se otorgan derechos sobre dichos recursos a los individuos, el mercado fija los precios de la caza mayor, y el hecho de poseer, vigilar o matar especies en peligro gana valor, por lo que la gente las conserva con más prudencia. Sin embargo, hasta hace poco, la mayoría de los países en desarrollo eran partidarios de estrategias de conservación centralizadas y proteccionistas. Cuando los británicos se apoderaron de partes de África a finales del siglo xix, crearon parques nacionales y expulsaron a las poblaciones indígenas de sus tierras para proteger a los animales. También crearon reservas semejantes otras potencias coloniales, y casi todos los países en desarrollo han mantenido la misma política desde la independencia.

En los países más ricos, los gobiernos tienen recursos para impedir la caza furtiva y pagar salarios decentes a guardas forestales, y su población, en general, está más dispuesta a ceder cierta gratificación económica individual por el bien de la sociedad. Pero pocos Estados pobres pueden proteger a sus animales salvajes. Un estudio de 1995 calculaba que, en Kenia, defender a los elefantes costaría unos 165 euros por kilómetro cuadrado de hábitat, una suma imposible para su Gobierno. No es raro que la población animal en Kenia haya descendido casi un 50% en las dos últimas décadas. Además, la corrupción y la pobreza, exacerbadas por el VIH/sida, también contribuyen a dificultar la gestión de la naturaleza en los países pobres. Los desesperados y hambrientos no pueden discriminar entre especies comunes y en peligro. Los habitantes de la cuenca del Congo consumen casi cinco millones de toneladas de carne animal al año.

Otro factor aún más importante es que el control por el Estado de los animales salvajes les quita valor para la población local, que

no obtiene provecho. Según un estudio sobre la Reserva de Masai Mara (Ke-nia), la población recibía menos del 10% de los ingresos por turismo del parque: ganan tan poco por mantener vivos a los animales para el turismo que venden información a los furtivos.

Los países en desarrollo deben considerar la fauna salvaje como un recurso renovable. Zimbabue es un ejemplo: por su condición de país *non grato*, ha quedado al margen de las presiones de los Estados occidentales donantes y las organizaciones internacionales para que evitara estrategias de conservación en las que entrara la caza. En los 80, ante la generalización de la caza furtiva que comenzaba a diezmar las poblaciones animales, su Gobierno creó el Programa de Gestión de Recursos Indígenas en Áreas Comunitarias (CAMPFIRE, en sus siglas en inglés), y otorgó a las pequeñas comunidades derechos sobre la tierra y los recursos animales –búfalos, elefantes y otros ejemplares de caza mayor– en sus áreas. Cada una podía vender licencias de caza o mostrar los mamíferos a los turistas. Según el Gobierno, las nuevas rentas incrementarían el valor de la fauna para los residentes locales, lo que disminuiría el interés en ayudar a los furtivos.

Los habitantes empezaron a comprender las posibilidades de esta fuente de ingresos a largo plazo. Tomaron decisiones colectivas sobre cuántos animales podían cazarse, anunciaron su fauna a los guías de safaris y elevaron el precio de la caza –ahora, los permisos pueden costar hasta 20.000 dólares por animal muerto–. Desde el comienzo del CAMPFIRE, las poblaciones se han recuperado. Por ejemplo, el número de elefantes en Zimbabue es más del doble que hace 20 años, aunque con la reciente agitación política y la desaparición del imperio de la ley en el país se han perdido algunos ejemplares. También han establecido programas parecidos otros países del sur de África, con resultados similares. Los rinocerontes blancos de Suráfrica han pasado de unos 200 a principios de los 70 a unos 11.000, después de desarrollar estrategias de mercado. En la región de Luangwa, el porcentaje de ingresos rurales dedicados a la gestión de la fauna salvaje au-mentó más de diez veces entre 1997 y 2000.

A pesar de estos éxitos, a los grupos ecologistas de los países ricos les preocupa que les llamen asesinos de animales si apoyan abiertamente la conservación de libre mercado. Durante años, WWF no informó

a sus miembros de que había financiado en África programas que incluían la caza. Las organizaciones occidentales protectoras de animales han criticado los programas que consideran a los grandes mamíferos un recurso renovable. Ni siquiera los partidarios del ecologismo de libre mercado se centran en los países en desarrollo. Aunque algunos especialistas, como el economista de la Universidad de Nueva York William Easterly, defienden la aplicación de incentivos de mercado a la ayuda exterior, ningún gabinete de estudios considera prioritarias las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Los más ecologistas del Congreso de Estados Unidos –incluidos los defensores de soluciones de libre mercado en su propio país– han ignorado el potencial de este conservacionismo fuera.
Mientras los grandes grupos ecologistas, los partidarios del libre mercado en EE UU y Europa, y los países en desarrollo no tengan el valor de adoptar la política de mercado, escenas como la de Luangwa Sur serán cada vez más difíciles de ver.

Joshua Kurlantzick es redactor jefe
de la sección Internacional en The New Republic.

Fecha de creación
11 septiembre, 2007